

Equipamientos e igualdad en un momento de cambio

Marta Román Rivas

Geógrafa

Compartir cuidados para conquistar la igualdad¹

Los equipamientos han estado, desde su concepción y sus orígenes, muy vinculados a la igualdad y a la emancipación de las mujeres. El centro de la reivindicación ha sido y sigue siendo cómo compartir, repartir y redistribuir la responsabilidad, sobre todo un conjunto de tareas de cuidado, salud, atención o formación que, tradicionalmente, han sido atribuidas al ámbito del hogar y han estado protagonizadas por mujeres.

Las feministas materialistas del siglo XIX ya planteaban que solo se podía alcanzar la igualdad en la esfera pública si se resolvía de forma colectiva el trabajo doméstico, al considerar que este era un inmenso lastre para la participación política y social de las mujeres (Hayden 1981). Ellas concibieron que sacar de las casas las tareas domésticas y hacerlas comunitarias era la forma de abordar esta cuestión. Diseñaron casas sin cocina y constituyeron cooperativas de mujeres que se hacían cargo de comedores públicos, de casas cuna para la crianza infantil y de otros servicios domésticos que permitían liberar parte del trabajo realizado en los hogares. La lucha de estas mujeres ayudó a visibilizar el trabajo que se realizaba tras

¹El contenido de parte de esta conferencia procede del estudio realizado por la autora, junto con Begoña Pernas, *Guía de Planeamiento Urbanístico desde la Perspectiva de Género del Ayuntamiento de Madrid* (2010), no publicado a fecha de hoy.

las fachadas y permitió ensayar nuevas fórmulas de organización y gestión comunitaria.

En el origen de los «protoequipamientos» resulta también muy importante la labor de las asociaciones benéficas en las ciudades de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La investigadora Daphne Spain (2001) resalta el papel de estas organizaciones de mujeres que crearon servicios comunitarios para evitar la quiebra social y responder a las ingentes necesidades que se acumulaban en las nuevas ciudades industriales. Las organizaciones benéficas de carácter religioso ampararon casas de acogida para mujeres, viviendas para inmigrantes, baños públicos, colegios y espacios de juego, entre otros muchos servicios. Su labor iba dirigida a la población más necesitada y no tenía, como en el caso de las feministas materialistas, un componente tan claramente emancipador. No obstante, su actividad contribuyó a facilitar y a mejorar la inserción laboral femenina gracias a los servicios específicos que crearon para mujeres, como las residencias y los cursos de formación para las jóvenes que ingresaban en los nuevos empleos urbanos.



Guardería infantil de Denison House (Massachusetts), alrededor de 1900.

Fuente: Daphne Spain (2001).

La propia labor de estas organizaciones en la esfera pública fue un gran paso que empoderó a sus protagonistas y allanó el camino para futuras conquistas políticas y sociales. La promoción, diseño y construcción de edificios, la gestión de servicios diversos y su gran capacidad organizativa las convirtió en un antecedente de los movimientos sufragistas.

Este vínculo entre equipamientos y presencia pública femenina queda muy bien retratado en la experiencia de Vanport City, más conocida como Kaiser Ville (Oregón). Esta ciudad portuaria se dio a conocer durante la Segunda Guerra Mundial gracias a la velocidad con la que sus astilleros lograron fabricar barcos aplicando sistemas de producción fordistas (Hayden 1981). El empresario que levantó este emporio, Kaiser, sabía que, para que las mujeres pudieran trabajar, había que resolver gran parte de los asuntos vinculados a la gestión doméstica. Desde el primer año de la contienda, la ciudad albergó una gran cantidad de servicios como guarderías, colegios, comedores comunales u otros servicios para el mantenimiento de los hogares. En este caso no había detrás un movimiento de mujeres, sino que la iniciativa respondía a las necesidades del sistema productivo, que necesitaba mano de obra en un momento de guerra, por eso, cuando volvieron los soldados del frente, esta experiencia finalizó.



Imagen aérea de Vanport City, más conocida como Kaiser Ville, sobre 1945.

Fuente: ohs.org

Las sociedades nórdicas son una referencia básica cuando se habla del Estado del Bienestar, en ellas las redes de servicios públicos se han

concebido como los cimientos de este modelo de Estado. En este caso hay detrás organizaciones de mujeres que plantean nuevas reglas de convivencia social y destaca la labor de la feminista Alva Myrda, premio Nobel de la Paz, que fue una de sus ideólogas. En su obra escrita en los años 30, cuando Suecia era un país pobre, planteó las bases del Estado de Bienestar, en el que la libertad individual tiene que ir irremediamente unida a soluciones comunitarias en todos los ámbitos sociales. Alva Myrda colaboró estrechamente con el arquitecto Sven Markelius en el diseño de viviendas con servicios comunitarios que incluían espacios para el trabajo o para el cuidado de niños en el mismo bloque. Soluciones que, ahora mismo, parecen muy novedosas, pero que datan de las primeras décadas del siglo pasado (Velázquez Valoría 2006).

Una reivindicación todavía vigente

Estaría bien poder decir que las dotaciones vinculadas al cuidado benefician por igual a hombres y a mujeres, pero lo cierto es que, en la actualidad, cuando se habla de conciliación, se sigue asumiendo que la responsabilidad de un amplio conjunto de tareas relacionadas con el mantenimiento social recae en manos femeninas. Por ello, la presencia o ausencia de guarderías, centros de día u otras dotaciones básicas están intrínsecamente vinculadas al acceso al empleo, a la autonomía y al bienestar de las mujeres, igual que lo estaban para las mujeres de hace un siglo.



Las tareas de atención a la infancia y a los mayores se siguen conjugando en femenino.

Aunque en la actualidad hay todo un conjunto de servicios públicos y privados que asumen una parte de las labores de atención y cuidado, todavía queda una ingente tarea por realizar en el reparto de esta gran bolsa de trabajo no remunerado. María Ángeles Durán, en sus estudios sobre el uso del tiempo, muestra la desigual dedicación que pervive en las tareas de atención de los colectivos dependientes. Tanto en el cuidado de mayores como de menores, las mujeres asumen respectivamente el 80 y el 81 por cien de las horas de cuidado que se llevan a cabo en nuestro país².

Algunos de los análisis sobre el uso del tiempo y la contabilización del trabajo no remunerado han sido propiciados por organismos nacionales o internacionales que han intentado estimar y hacer proyecciones sobre el trasvase previsto del cuidado no remunerado, realizado en los hogares, a los servicios socio-sanitarios asumidos en parte por el Estado y en parte por el sector privado. Las condiciones impuestas por la crisis han trastocado las proyecciones realizadas en momentos de expansión económica y han roto este trasvase de las últimas décadas. Por un lado, debido a la restricción de la oferta de servicios públicos asequibles y, por otro lado, debido a las nuevas estrategias familiares de contención del gasto que conllevan prescindir de servicios externos al hogar como comedores escolares, escuelas infantiles o residencias de mayores, entre otros. Esta situación lastra el empleo femenino y agranda las brechas de género y clase, que solo una buena red de servicios públicos puede reducir o mitigar.

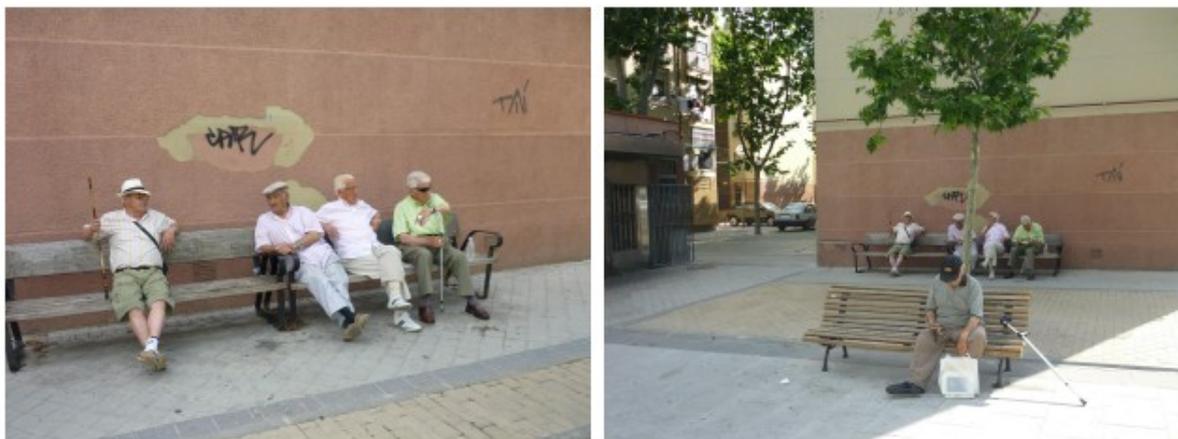
Además de ser las mujeres las encargadas del sostenimiento del bienestar familiar, son también las que menos recursos económicos tienen. La debilidad mayor frente al mercado de trabajo, presente en todos los indicadores (desde la precariedad laboral a la diferencia salarial), convierte a la población femenina en más dependiente de los servicios y dotaciones públicas para asegurar su bienestar. La historia y la estructura social explican, por lo tanto, la alianza entre las mujeres y los equipamientos públicos.

²Encuesta CSIC-ASEP 2000 sobre tiempo de trabajo no remunerado.

Un ejemplo sobre el que reflexionar

Una reflexión sobre los equipamientos urbanos de un barrio popular de Madrid puede ayudarnos a plantear dónde están las debilidades y fortalezas de las dotaciones públicas actualmente y, a partir de ahí, proponer alternativas y una nueva orientación al papel de estos servicios y bienes colectivos en un momento en el que muchos se ven amenazados.

Comenzamos esta visita a los equipamientos caminando por sus proximidades. En las fotos que acompañan este texto se ve la imagen de unos jubilados sentados en un rincón del barrio una mañana cualquiera. Ellos cuentan que se reúnen casi a diario en estos bancos de madera que rescataron de un contenedor cuando el Ayuntamiento intentaba sustituirlos por otro modelo. El grupo se siente orgulloso de su hazaña, y lo cierto es que, su simple presencia junto a este muro, que les proporciona sombra en verano y frena los vientos del invierno, contribuye activamente a dar vida y seguridad a esta calle.



El espacio público se nutre de la presencia de los vecinos y, a su vez, la ciudadanía puede encontrar aquí respuesta a necesidades básicas de socialización, pertenencia o seguridad. Pero, para que se produzca esta interacción, la calle debe ofrecer unas condiciones adecuadas de habitabilidad.

A menos de cien metros de allí, justo al otro lado de una verja, se observa un edificio plateado. Se trata de una construcción moderna que contrasta con las vetustas y sobrias viviendas obreras del barrio.



El vallado genera una brecha entre dos ámbitos públicos que han terminado por darse la espalda: la calle y los equipamientos.

Si traspasamos la verja, llegamos al centro de mayores. Un vigilante jurado flanquea la puerta y permite la entrada solo a aquellas personas que cumplen unos requisitos y que están en posesión de un carnet. Tras subir unas escaleras, se llega a una sala donde otro grupo de hombres, similar al de la calle, juega a las cartas. En ambos casos son jubilados que no sufren

problemas graves de dependencia, más allá de las limitaciones propias de la edad y que lo que precisan es un espacio agradable y accesible para encontrarse.



Los equipamientos, aunque públicos, pueden terminar teniendo una lógica o un funcionamiento de servicio privado: control de acceso restringido, autoprotección frente al entorno donde se asientan o concepción de la ciudadanía como clientes.

Podríamos decir que la motivación para que unos acudan a la calle y otros entren en este equipamiento público es similar: tener una actividad fuera de casa, socializar y pasar un buen rato. Pero, si observamos la forma de darle respuesta, varía en uno y otro caso. En la calle, la relación

es informal, no requiere estar apuntado o que haya personal especializado y precisa escasa infraestructura —más allá de un cómodo banco bien situado—. Ese rincón, además, no pertenece solo a los mayores y puede ser utilizado de forma variada a lo largo del día. Nos podemos imaginar a niños jugando a la salida del colegio, alguna pandilla los fines de semana o una pareja al anochecer.

El equipamiento de mayores está pensado para un grupo de población específica y solo accede quien está acreditado. Es una infraestructura pensada para un uso concreto y no admite o, mejor dicho, no se utiliza para otras actividades que no sean la atención a las personas mayores. Su puesta en funcionamiento requiere personal diverso para las tareas de administración, gestión, seguridad o limpieza.

El equipamiento y la calle funcionan como dos mundos aparte divididos por férreas rejas y normas de acceso. Se ha establecido como algo habitual esta ruptura o distancia entre las dotaciones y el entorno donde se instalan, lo que deriva en que se pierdan muchas oportunidades de vínculo y relación que reforzarían ambos. Sin ir más lejos: ¿No podrían los hombres que descansan en el banco tener la posibilidad de un uso libre de los jardines que rodean ese equipamiento público si no hubiese valla? ¿No se podría plantear que algunos de los espacios previstos para los mayores lo fueran también para jóvenes o para asociaciones locales que precisaran de un lugar disponible, fuera del horario en el que se prestan los servicios a los mayores? ¿No podría haber una cafetería de libre acceso para cualquier persona que pasara por allí y que quisiera disfrutar de este estupendo edificio público y de sus jardines? ¿No se podrían plantear huertos urbanos gestionados por alguna asociación vecinal en estos terrenos públicos?

Junto a este centro de día hay un equipamiento sanitario que, al igual que el edificio anterior, está totalmente vallado. Se trata también de un edificio reciente de arquitectura moderna. Su aspecto blindado y la falta de vanos hacen que pierda muchas de las capacidades que deberían proveer los edificios públicos para favorecer la seguridad y dinamizar la vida urbana de su entorno.

La arquitectura ciega elegida resta diálogo entre dentro y fuera, desincentiva o intimida el acceso, merma control social —porque no hay ojos que vean ni oídos que oigan— y, por lo tanto, detrae seguridad al entorno

circundante. La seguridad se convierte, así, en un nuevo coste de mantenimiento —ejemplificado por el guardia privado—, al haber obviado otros mecanismos informales de seguridad y control social, que todo edificio, y más si es público, debería garantizar.



Algunos equipamientos se han convertido en piezas aisladas que no han cuidado su integración urbana. Su arquitectura «muda» y «ciega» hace que aporten muy poco al entorno donde se asientan.

Concebidas como piezas aisladas, la propia dimensión de estos equipamientos o de sus parcelas se atiene a los requerimientos sectoriales precisos, como contenedores de servicios especializados, pero nadie atiende a su «cosido» con el tejido urbano.



Las grandes manzanas de equipamientos, cerradas por vallados, se convierten en barreras infranqueables que entorpecen la movilidad y accesibilidad dentro del barrio.

Las generosas parcelas disponibles han favorecido la aparición de supermanzanas valladas que crean barreras infranqueables. La suma, como sucede en este caso, de varios equipamientos supone una brecha difícil de salvar, que penaliza la movilidad peatonal y la conexión dentro del barrio. El papel del urbanismo ha quedado relegado a la provisión de suelo para dotaciones y no garantiza la integración de las mismas en la trama urbana.

Alternativas y salidas para hacer frente a las necesidades sociales en un momento de crisis

El cuestionamiento de la viabilidad y la pervivencia de servicios sociales básicos en un momento de crisis vuelve a poner sobre la mesa que las tareas de mantenimiento de la colectividad siguen considerándose un asunto secundario, cuya responsabilidad se puede «rebotar» a las familias cuando las condiciones cambian o son adversas. Y es, precisamente, en el reparto equitativo de los cuidados donde, como hemos visto, se sitúa uno

de los pilares de la igualdad entre mujeres y hombres y, por lo tanto, su resolución debe permanecer en la arena colectiva.

La menor disponibilidad de recursos públicos no puede significar el abandono de ciertos servicios básicos, su reclusión en el hogar o su privatización. Hay un amplio abanico de respuestas colectivas que todavía no se han explorado y que permiten plantear alternativas válidas y eficaces que eviten invisibilizar entre las cuatro paredes del hogar esta ingente labor que, por otro lado, es la base del bienestar social.

Las soluciones posibles tienen como denominador común el refuerzo de lo público, aunque esto no signifique irremediamente que el Estado asuma en solitario la provisión de todos los servicios. Se trata de que los equipamientos y todos los mecanismos con los que cuentan las distintas administraciones asuman un papel activo en la articulación y dinamización de la vida comunitaria de los barrios, lo que supone apoyar, integrar y colaborar con organizaciones vecinales y sociales y con pequeñas empresas locales.

Esta búsqueda del interés colectivo pasa por devolver al espacio público todo el potencial que tiene para favorecer la vida social, las redes de apoyo y los nexos de pertenencia. Un espacio público amigable, rico y diverso puede reducir el aislamiento, la soledad o la dependencia de personas vulnerables. En este sentido, igual no hace falta plantear un servicio especializado de ludoteca en un barrio, si existen parques o plazas accesibles donde los menores puedan jugar por su cuenta bajo un sano control vecinal, tal como se ha hecho hasta hace no tanto tiempo. En este caso, todos pueden ganar: la infancia libre que dispone de un lugar cerca de casa donde jugar, las familias que resuelven el cuidado infantil de manera informal, flexible y sin coste alguno, y el barrio que vuelve a tener vida en sus calles.

Las dotaciones pueden ser la plataforma para organizar redes sociales o de ayuda mutua en las que renazca la confianza: un banco de tiempo, por ejemplo, o un sistema de transporte o compras compartidas. Es posible que el mejor medio para dinamizar un espacio sea ceder parte de la gestión o del uso a las asociaciones de un barrio, mientras que, en otros casos, instalar un semillero de empresas o permitir servicios personales de proximidad alrededor de un equipamiento público puede ser la solución a problemas locales.



Volver a permitir y a propiciar el juego infantil en las calles es una forma activa de fomentar la vida vecinal, de facilitar redes de apoyo y ayuda mutua y de generar seguridad en el barrio.

La respuesta a ciertas demandas de la población no tiene por qué ir irremediamente asociada a la construcción de nuevas infraestructuras, sino a mejoras en la gestión de las existentes. En tiempos de austeridad, la mejor utilización y la calidad de los servicios públicos es una manera de garantizar su sostenibilidad y su supervivencia.

Innovar en la gestión

El cambio requerido para que los equipamientos representen un papel más activo se traduce en la forma de gestionar estos bienes colectivos, destinar tiempo y ensayar nuevos métodos para coordinar personas, colectivos y administraciones diversas. La tarea que hay que acometer es compleja y todavía resulta muy novedosa, pero hace falta caminar en esa dirección para dar respuesta a las amplias necesidades sociales de un barrio cuando hay recursos limitados.

Lo más interesante de todo esto es que, lejos de perder, todos podemos ganar en esta búsqueda. Integrar la complejidad en la planificación provocará sencillez en el uso o, dicho a la inversa, la simplificación en la gestión de los recursos colectivos genera vidas complicadas. Así, los conflictos evitados o el tiempo «ahorrado» en la fase inicial de planificación los terminan sufriendo o invirtiendo los destinatarios finales durante el tiempo de uso.

Por ejemplo, la ubicación de un equipamiento escolar en una zona alejada del barrio, debido a que hay suelo vacante y es más sencillo plantearlo allí que dentro de la trama urbana consolidada, exigirá a los menores largos recorridos todos los días y dificultará que puedan hacer ese trayecto por su cuenta, lo que creará dependencia de los adultos y será una nueva carga para las familias. Seguramente, la tramitación de ese proyecto y su construcción se habrá podido desarrollar de forma más rápida que si se hubiese tenido que encajar en el barrio y llegar a acuerdos con el vecindario. Pero, esos escolares y sus familias tendrán que pagar esa «sencilla» decisión todos los días, con su tiempo, su esfuerzo, su energía y, los menores, renunciando a algo tan importante como su autonomía.

La complejidad de las decisiones exige que se escuchen voces diversas, no solo de quienes tienen acceso a los medios de comunicación o tienen plataformas para hacerse oír. La participación es la manera más directa de compartir decisiones y responsabilidades. Mientras que «los clientes» consumen de forma exigente, ajenos a los límites del sistema, «la ciudadanía» comparte información, debate las opciones y se corresponsabiliza en el buen uso y cuidado de los bienes y servicios colectivos.

La búsqueda de la complejidad en la toma de decisiones exige también diluir la férrea compartimentación sectorial de las administraciones. En esta fragmentación ha cabido duplicar servicios y especializar espacios para colectivos concretos. Es cierto que esta especialización administrativa ha permitido ofrecer servicios de calidad, pero perdiendo muchas oportunidades de amplificar su incidencia por la falta de una política integral que saque el máximo provecho a los recursos públicos.

Utilizarlas de forma intensiva no significa hacinar, rebajar o degradar, sino generar nuevas oportunidades con las que todo el mundo salga ganando: auditorios, bibliotecas o canchas de deporte de los colegios que se

ponen a disposición del barrio fuera del horario escolar; o, a la inversa, espacios deportivos municipales utilizados por el alumnado de los centros escolares.

Las posibilidades son diversas y deben explorarse. La diversidad caracteriza tanto los sectores en los que intervenir, como las fórmulas de gestión y el resultado de los acuerdos de colaboración. Parece que nos situamos en el campo de la innovación y, por lo tanto, habrá que desarrollar pruebas piloto, evaluar resultados y asumir riesgos para lograr éxitos.

Una reflexión abierta, a modo de conclusión

Los equipamientos son piezas básicas en la cohesión social de los barrios. Como hemos visto, favorecen activamente la igualdad entre mujeres y hombres, porque contribuyen al reparto de las responsabilidades de atención y cuidado que, tradicionalmente, han estado pivotando sobre el trabajo femenino.

En el ámbito urbano, muchas de estas «perlas» han funcionado como piezas aisladas, al olvidarse que cobran sentido si están engarzadas en el espacio público. Los ejemplos analizados muestran las oportunidades perdidas por el divorcio que se ha producido entre los equipamientos y la calle, materializado en los férreos vallados que circundan una gran parte de los equipamientos que se han construido en los últimos años. Por ello, uno de los aspectos fundamentales que se deben perseguir es que estos dos ámbitos públicos vuelvan a dialogar entre sí para reforzar todo lo que se pueden ofrecer mutuamente: vitalidad, prestigio o seguridad, entre muchas otras cosas.

Los equipamientos no pueden quedar reducidos a meros «expendedores» de servicios especializados. Esa labor, aunque importante para sus destinatarios principales, resulta pobre y escasa para el potencial que realmente podrían y deberían asumir en la vida vecinal. Abrir un equipamiento al barrio supone concebir espacios, colectivos o actividades que no entren estrictamente dentro del área de «competencia» de quien los gestiona, pero que se decide a favorecer activamente, porque contribuyen a fortalecer el tejido asociativo y social de un lugar: salas de reunión o auditorios para organizaciones locales, cafeterías dentro de los equipamientos gestiona-

das por empresas de inserción social, o actividades culturales o deportivas ofertadas de forma gratuita para personas en riesgo de exclusión.

Frente al recorte indiscriminado de servicios sociales, que solo crea y agranda las desigualdades, se pueden plantear todo un conjunto de alternativas y cambios en la concepción y en la gestión de estos bienes colectivos que pasa por ensayar nuevas fórmulas de gestión intersectorial y de participación y corresponsabilidad social.

La privatización de los servicios públicos rompe todas las posibilidades de integrar políticas públicas de amplio alcance. Con esa fórmula se abandonan todas las posibilidades de que asuman una función social, dado que la cuenta de resultados de la empresa encargada de ofrecer servicios específicos no tiene por qué coincidir con la rentabilidad social que pueden aportar estos bienes colectivos. No se trata solo de cuidar mayores, hacer deporte o ir a la biblioteca como usos aislados, sino de que esas acciones no estén fragmentadas y tengan un sentido social que contribuya a la igualdad, a la cohesión y al bienestar de toda la comunidad.

Referencias bibliográficas

HAYDEN, D. (1981): *The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs for American Homes, Neighborhoods, and Cities*. Cambridge: MIT Press.

SPAIN, D. (2001): *How women saved the city*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

VELÁZQUEZ VALORÍA, I. (2006): «Una mirada atrás: mujeres en el urbanismo y en la construcción de la ciudad». En I. VELÁZQUEZ VALORÍA (coord.), *Urbanismo y Género. Una visión necesaria para todos*. Barcelona: Diputación de Barcelona.